

*Procuración General de la Nación*

S u p r e m a      C o r t e :

-I-

Como dije a fs. 101, contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala III) de fs. 64/70, que desestimó el recurso de queja presentado por el señor Jorge Raúl Miniño, por la cual se denegó el recurso de apelación que había interpuesto contra la nota 904/2011 y la resolución 27/11 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia -la que había dado por concluida la instrucción sumarial y corrido el traslado del art. 32 de la ley 25.156 para el descargo y ofrecimiento de prueba- la parte actora dedujo el recurso extraordinario federal de fs. 74/93, concedido en tanto referido a la interpretación del derecho federal invocado (fs. 95 y vta).

-II-

De las constancias de la causa surgía que al conceder el recurso extraordinario no se había dado cumplimiento al trámite previsto en el art. 257, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Por tal motivo V.E., como surge de fs. 102/103, dejó sin efecto la concesión y ordenó dar el pertinente traslado. Cumplido el recaudo y habiendo contestado el Estado Nacional el recurso interpuesto (fs. 110/127), la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió la procedencia del recurso extraordinario intentado por el actor Miniño, en cuanto a la interpretación del derecho federal invocado (fs. 131/132).

En ese estado, se da nueva vista a esta Procuración General (fs. 138).

-III-

Tengo para mí que el recurso resulta formalmente admisible toda vez que, más allá de que se trate del rechazo de una queja por apelación denegada -tema procesal propio de los jueces de la causa y exento del análisis de V.E.- , el *a quo* resolvió el rechazo con fundamento en su interpretación de la ley 25.156 y es esta decisión del superior tribunal de la causa la contraria al derecho que sostiene el recurrente.

Ello así, la discusión estriba en la facultad de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia para denegar la apelación interpuesta (copia de fs. 32/33 de la queja) contra la resolución de la misma comisión que dio por concluida la instrucción sumarial y corrió el traslado a los presuntos responsables -entre ellos el aquí recurrente- para que presenten el descargo y la producción de prueba que estimaren procedente (resolución CNDC 27/11- fs. 1 bis/16 de la queja) y su notificación por nota 904/CNDC/11 (fs. 17 *idem*).

En primer lugar cabe destacar el reciente fallo del Tribunal (CSJ 73/2012 (48-C)/CS1 y CSJ 1411/2011 (47-C)/CS1 - recurso de hecho- "Cencosud S.A. s/ apela resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia" del 14 de abril de 2015) en lo que se refiere a la precisión de los alcances del art. 58 de la ley 25.156 "...en orden a las atribuciones que, con carácter transitorio, corresponden a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a la Secretaría de Comercio, respectivamente. Esos antecedentes ... revelan una clara y consistente posición de

## *Procuración General de la Nación*

esta Corte que distingue las tareas de investigación, instrucción y asesoramiento, transitoriamente a cargo de la Comisión, y la actividad resolutive que, en tanto no se constituya el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, corresponde a la Secretaría de Comercio...".

De dicha exégesis no cabe más que inferir que la resolución CNDC 27/11 y su consecuente notificación por nota 904/11, en tanto da por concluida la instrucción sumaria e intima a los presuntos infractores a presentar su descargo, encuentra sustento en el ejercicio de atribuciones propias de la Comisión en su faz instructoria.

En referencia, ahora sí, a la denegación de la apelación contra la antedicha resolución entiendo que se trata de la derivación lógica de una competencia atribuida a la Comisión. El art. 32 de la ley 25.156 establece que "Concluida la instrucción del sumario el Tribunal [conforme a la interpretación supra indicada debe entenderse Comisión Nacional de Defensa de la Competencia] notificará a los presuntos responsables para que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente". La reglamentación a dicho artículo dispuso que "La resolución que dispone el traslado para el descargo y ofrecimiento de prueba del presunto responsable será fundada, con indicación de las conductas que se le atribuyen al mismo". Por su parte, el siguiente artículo (el 33) de la ley expresa la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal [léase Comisión] en materia de prueba y en su art. 52 no figuran el cierre del sumario ni el traslado para el descargo entre los actos enumerados como susceptibles de recurso directo.

De lo expuesto puede inferirse, como bien lo ha explicado la cámara en el pronunciamiento que aquí se apela, que no se advierte que cualquier acto dictado durante el procedimiento previsto para la investigación de conductas sea recurrible por vía de apelación directa ante ella.

-IV-

Opino, por lo tanto, que corresponde confirmar la sentencia motivo del recurso.

Buenos Aires, 18 de junio de 2015.

ES COPIA

LAURA M. MONTI

  
ADRIANA D. MARCUCCIO  
Procuradora General  
Ministerio Público de la Nación